

TEXTOS LEGALES BÁSICOS

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

19.ª EDICIÓN 2021

Contiene concordancias, modificaciones resaltadas
e índice analítico



eBook + Actualizaciones en www.colex.es



LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

19.ª EDICIÓN 2021

(Edición actualizada a 15 de abril de 2021)

COLEX 2021

Copyright © 2021

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sigs. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) garantiza el respeto de los citados derechos.

Editorial Colex S.L. vela por la exactitud de los textos legales publicados. No obstante, advierte que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida, y declinando cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en los mismos.

Editorial Colex S.L. habilitará a través de la web www.colex.es un servicio online para acceder a las eventuales correcciones de erratas de cualquier libro perteneciente a nuestra editorial, así como a las actualizaciones de los textos legislativos mientras que la edición adquirida esté a la venta y no exista una posterior.

© Editorial Colex, S.L.
Calle Costa Rica, número 5, 3º B (local comercial)
A Coruña, 15004, A Coruña (Galicia)
info@colex.es
www.colex.es

I.S.B.N.: 978-84-1359-218-3
Depósito Legal: C 576-2021

LEYENDA ICONOS



Texto modificado



Texto nuevo

ABREVIATURAS

ART.	Artículo
CC	Código Civil
C DE C	Código de Comercio
CE	Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978
CP	Código Penal (LO 10/1995, de 23 de noviembre)
DA / D.A.	Disposición adicional
DDT / D.DT.	Disposición derogatoria
DF / D.F.	Disposición final
DT / D.T.	Disposición transitoria
EGP	Estatuto General de los Procuradores (RD 1281/2002, de 5 de diciembre)
EOMF	Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre)
LA	Ley de Aguas (RDLeg. 1/2001, de 20 de julio)
LAU	Ley de Arrendamientos Urbanos (Ley 29/1994, de 24 de noviembre)
LAJG	Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (Ley 1/1996, de 10 de enero)
LCCH	Ley Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985, de 16 de julio)
LCGC	Ley sobre las Condiciones Generales de la Contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril)
LCJ	Ley de Conflictos Jurisdiccionales (LO 2/1987, de 18 de mayo)
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)
LECR	Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD. de 14 de septiembre de 1882)
LH	Ley Hipotecaria (Decreto de 8 de febrero de 1946)
LHM Y PSD	Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión (Ley de 16 de diciembre de 1954)

ABREVIATURAS

LJCA	Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio)
LMV	Ley del Mercado de Valores (RDLeg. 4/2015, de 23 de octubre)
LN	Ley del Notariado (Ley de 28 de mayo de 1862)
LOPJ	Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio)
LPH	Ley de Propiedad Horizontal Ley de Propiedad Horizontal (Ley 49/1960, de 21 de julio)
LPI	Ley de Propiedad Intelectual (RDLeg. 1/1996, de 12 de abril)
LRC	Ley del Registro Civil (Ley de 8 de junio de 1957)
RAJG	Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita (RD 996/2003, de 25 de julio)
RC	Registro Civil
RGTO	Reglamento
RH	Reglamento Hipotecario (Decreto de 14 de febrero de 1947)
RN	Reglamento Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944)
RRC	Reglamento del Registro Civil (Decreto de 14 de noviembre de 1958)
RRM	Reglamento del Registro Mercantil (RD. 1784/1996, de 19 de julio)
SIGS	Siguientes

SUMARIO

LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	15
TÍTULO PRELIMINAR DE LAS NORMAS PROCESALES Y SU APLICACIÓN	45
LIBRO I. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LOS JUICIOS CIVILES	47
TÍTULO I. De la comparecencia y actuación en juicio	47
CAPÍTULO I. De la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y la legitimación	47
CAPÍTULO II. De la pluralidad de partes	50
CAPÍTULO III. De la sucesión procesal.	52
CAPÍTULO IV. Del poder de disposición de las partes sobre el proceso y sobre sus pretensiones	53
CAPÍTULO V. De la representación procesal y la defensa técnica	55
TÍTULO II. De la jurisdicción y de la competencia.	61
CAPÍTULO I. De la jurisdicción de los tribunales civiles y las cuestiones prejudiciales	61
Sección 1.ª De la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales civiles	61
Sección 2.ª De las cuestiones prejudiciales	62
CAPÍTULO II. De las reglas para determinar la competencia.	64
Sección 1.ª De la competencia objetiva.	64
Sección 2.ª De la competencia territorial.	65
Sección 3.ª De la competencia funcional.	69
CAPÍTULO III. De la declinatoria	69
CAPÍTULO IV. De los recursos en materia de jurisdicción y competencia	70
CAPÍTULO V. Del reparto de los asuntos	71
TÍTULO III. De la acumulación de acciones y de procesos	72
CAPÍTULO I. De la acumulación de acciones	72
CAPÍTULO II. De la acumulación de procesos	73
Sección 1.ª De la acumulación de procesos: disposiciones generales	73
Sección 2.ª De la acumulación de procesos pendientes ante un mismo tribunal.	75
Sección 3.ª De la acumulación de procesos pendientes ante distintos tribunales	76
Sección 4.ª De la acumulación de procesos singulares a procesos universales.	78
TÍTULO IV. De la abstención y la recusación	79
CAPÍTULO I. De la abstención y recusación: disposiciones generales.	79
CAPÍTULO II. De la abstención de Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y del personal al servicio de los tribunales civiles	79

SUMARIO

CAPÍTULO III. De la recusación de Jueces y Magistrados	81
CAPÍTULO IV. De la recusación de los Letrados de la Administración de Justicia de los tribunales civiles	83
CAPÍTULO V. De la recusación de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa, y de Auxilio Judicial	84
CAPÍTULO VI. De la recusación de los peritos	85
TÍTULO V. De las actuaciones judiciales.	86
CAPÍTULO I. Del lugar de las actuaciones judiciales.	86
CAPÍTULO II. Del tiempo de las actuaciones judiciales	87
Sección 1.ª De los días y las horas hábiles	87
Sección 2.ª De los plazos y los términos	87
CAPÍTULO III. De la intermediación, la publicidad y la lengua oficial.	89
CAPÍTULO IV. De la fe pública judicial y de la documentación de las actuaciones.	92
CAPÍTULO V. De los actos de comunicación judicial	94
CAPÍTULO VI. Del auxilio judicial.	103
CAPÍTULO VII. De la sustanciación, vista y decisión de los asuntos.	106
Sección 1.ª Del despacho ordinario.	106
Sección 2.ª De las vistas y de las comparencias	107
Sección 3.ª De las votaciones y fallos de los asuntos.	112
CAPÍTULO VIII. De las resoluciones procesales	115
Sección 1.ª De las clases, forma y contenido de las resoluciones y del modo de dictarlas, publicarlas y archivarlas	115
Sección 2.ª De los requisitos internos de la sentencia y de sus efectos	119
Sección 3.ª De las diligencias de ordenación.	121
CAPÍTULO IX. De la nulidad de las actuaciones.	122
CAPÍTULO X. De la reconstrucción de los autos	124
TÍTULO VI. De la cesación de las actuaciones judiciales y de la caducidad de la instancia	125
TÍTULO VII. De la tasación de costas	126
TÍTULO VIII. De la buena fe procesal	128
LIBRO II. DE LOS PROCESOS DECLARATIVOS	131
TÍTULO I. De las disposiciones comunes a los procesos declarativos	131
CAPÍTULO I. De las reglas para determinar el proceso correspondiente	131
CAPÍTULO II. De las diligencias preliminares	136
CAPÍTULO III. De la presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios e instrumentos	140
CAPÍTULO IV. De las copias de los escritos y documentos y su traslado.	143
CAPÍTULO V. De la prueba: disposiciones generales	146
Sección 1.ª Del objeto, necesidad e iniciativa de la prueba	146
Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia.	146
Sección 2.ª De la proposición y admisión	151
Sección 3.ª De otras disposiciones generales sobre la práctica de la prueba	153
Sección 4.ª De la anticipación y del aseguramiento de la prueba	154
CAPÍTULO VI. De los medios de prueba y las presunciones	156
Sección 1.ª Del interrogatorio de las partes.	157

SUMARIO

Sección 2. ^a De los documentos públicos	160
Sección 3. ^a De los documentos privados	161
Sección 4. ^a De las disposiciones comunes a las dos Secciones anteriores	162
Sección 5. ^a Del dictamen de peritos	164
Sección 6. ^a Del reconocimiento judicial	170
Sección 7. ^a Del interrogatorio de testigos	171
Sección 8. ^a De la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso . . .	175
Sección 9. ^a De las presunciones	176
CAPÍTULO VII. De las cuestiones incidentales	177
CAPÍTULO VIII. De la condena en costas	178
TÍTULO II. Del juicio ordinario	179
CAPÍTULO I. De las alegaciones iniciales	179
Sección 1. ^a De la demanda y su objeto	179
Sección 2. ^a De la contestación a la demanda y la reconvención	180
Sección 3. ^a De los efectos de la pendencia del proceso	182
CAPÍTULO II. De la audiencia previa al juicio	182
CAPÍTULO III. Del juicio	188
CAPÍTULO IV. De la sentencia	189
TÍTULO III. Del juicio verbal	190
TÍTULO IV. De los recursos	197
CAPÍTULO I. De los recursos: disposiciones generales	197
CAPÍTULO II. De los recursos de reposición y revisión	198
CAPÍTULO III. Del recurso de apelación y de la segunda instancia	200
Sección 1. ^a Del recurso de apelación y de la segunda instancia: disposiciones generales	200
Sección 2. ^a De la sustanciación de la apelación	200
CAPÍTULO IV. Del recurso extraordinario por infracción procesal	204
CAPÍTULO V. Del recurso de casación	206
CAPÍTULO VI. Del recurso en interés de la ley	210
CAPÍTULO VII. Del recurso de queja	210
TÍTULO V. De la rebeldía y de la rescisión de sentencias firmes y nueva audiencia al demandado rebelde	211
TÍTULO VI. De la revisión de sentencias firmes	214
LIBRO III. DE LA EJECUCIÓN FORZOSA Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES	217
TÍTULO I. De los títulos ejecutivos	217
CAPÍTULO I. De las sentencias y demás títulos ejecutivos	217
CAPÍTULO II. De los títulos ejecutivos extranjeros	219
TÍTULO II. De la ejecución provisional de resoluciones judiciales	219
CAPÍTULO I. De la ejecución provisional: disposiciones generales	219
CAPÍTULO II. De la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en primera instancia	220
Sección 1. ^a De la ejecución provisional y de la oposición a ella	220
Sección 2. ^a De la revocación o confirmación de la sentencia provisionalmente ejecutada	222

SUMARIO

CAPÍTULO III. De la ejecución provisional de sentencias de condena dictadas en segunda instancia	223
TÍTULO III. De la ejecución: disposiciones generales	224
CAPÍTULO I. De las partes de la ejecución.	224
CAPÍTULO II. Del tribunal competente.	226
CAPÍTULO III. Del despacho de la ejecución	227
CAPÍTULO IV. De la oposición a la ejecución y de la impugnación de actos de ejecución contrarios a la ley o al título ejecutivo	231
CAPÍTULO V. De la suspensión y término de la ejecución	234
TÍTULO IV. De la ejecución dineraria	236
CAPÍTULO I. De la ejecución dineraria: disposiciones generales.	236
CAPÍTULO II. Del requerimiento de pago.	239
CAPÍTULO III. Del embargo de bienes	240
Sección 1.ª De la traba de los bienes	240
Sección 2.ª Del embargo de bienes de terceros y de la tercería de dominio	242
Sección 3.ª De los bienes inembargables	245
Sección 4.ª De la prioridad del embargante y de la tercería de mejor derecho	247
Sección 5.ª De la garantía de la traba de bienes muebles y derechos.	249
Sección 6.ª De la garantía del embargo de inmuebles y de otros bienes susceptibles de inscripción.	252
Sección 7.ª De la administración judicial.	252
CAPÍTULO IV. Del procedimiento de apremio	253
Sección 1.ª Disposiciones generales para la realización de los bienes embargados	253
Sección 2.ª Valoración de los bienes embargados	254
Sección 3.ª Del convenio de realización	255
Sección 4.ª De la realización por persona o entidad especializada	256
Sección 5.ª De la subasta de los bienes muebles.	258
Sección 6.ª De la subasta de bienes inmuebles	263
Sección 7.ª De la administración para pago	271
CAPÍTULO V. De las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados.	272
TÍTULO V. De la ejecución no dineraria	280
CAPÍTULO I. De las disposiciones generales	280
CAPÍTULO II. De la ejecución por deberes de entregar cosas	280
CAPÍTULO III. De la ejecución por obligaciones de hacer y no hacer	282
CAPÍTULO IV. De la liquidación de daños y perjuicios, frutos y rentas y la rendición de cuentas	284
TÍTULO VI. De las medidas cautelares	286
CAPÍTULO I. De las medidas cautelares: disposiciones generales	286
CAPÍTULO II. Del procedimiento para la adopción de medidas cautelares	289
CAPÍTULO III. De la oposición a las medidas cautelares adoptadas sin audiencia del demandado	292
CAPÍTULO IV. De la modificación y alzamiento de las medidas cautelares	292
CAPÍTULO V. De la caución sustitutoria de las medidas cautelares	293

SUMARIO

LIBRO IV. DE LOS PROCESOS ESPECIALES	295
TÍTULO I. De los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores	295
CAPÍTULO I. De las disposiciones generales	295
CAPÍTULO II. De los procesos sobre la capacidad de las personas	297
CAPÍTULO III. De los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad	300
CAPÍTULO IV. De los procesos matrimoniales y de menores	301
CAPÍTULO IV. BISMedidas relativas a la restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional	308
CAPÍTULO V. De la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores y del procedimiento para determinar la necesidad de asentimiento en la adopción	312
TÍTULO II. De la división judicial de patrimonios.	314
CAPÍTULO I. De la división de la herencia	314
Sección 1.ª Del procedimiento para la división de la herencia	314
Sección 2.ª De la intervención del caudal hereditario.	317
Sección 3.ª De la administración del caudal hereditario.	320
CAPÍTULO II. Del procedimiento para la liquidación del régimen económico matrimonial	322
TÍTULO III. De los procesos monitorio y cambiario.	324
CAPÍTULO I. Del proceso monitorio.	324
CAPÍTULO II. Del juicio cambiario	327
DISPOSICIONES ADICIONALES	329
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.	332
DISPOSICIONES DEROGATORIAS.	332
DISPOSICIONES FINALES.	334
ÍNDICE ANALÍTICO	355

**LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO,
DE ENJUICIAMIENTO CIVIL**

LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

–BOE n.º 7, de 8 de enero de 2000–

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El derecho de todos a una tutela judicial efectiva, expresado en el apartado primero del artículo 24 de la Constitución, coincide con el anhelo y la necesidad social de una Justicia civil nueva, caracterizada precisamente por la efectividad.

Justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud de garantías procesales. Pero tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela, y con mayor capacidad de transformación real de las cosas. Significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinación de lo jurídico en los casos concretos, es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, medidas cautelares más asequibles y eficaces, ejecución forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con más posibilidades de éxito en la satisfacción real de los derechos e intereses legítimos.

Ni la naturaleza del crédito civil o mercantil ni las situaciones personales y familiares que incumbe resolver en los procesos civiles justifican un período de años hasta el logro de una resolución eficaz, con capacidad de producir transformaciones reales en las vidas de quienes han necesitado acudir a los tribunales civiles.

La efectividad de la tutela judicial civil debe suponer un acercamiento de la Justicia al justiciable, que no consiste en mejorar la imagen de la Justicia, para hacerla parecer más accesible, sino en estructurar procesalmente el trabajo jurisdiccional de modo que cada asunto haya de ser mejor seguido y conocido por el tribunal, tanto en su planteamiento inicial y para la eventual necesidad de depurar la existencia de óbices y falta de presupuestos procesales -nada más ineficaz que un proceso con sentencia absolutoria de la instancia-, como en la determinación de lo verdaderamente controvertido y en la práctica y valoración de la prueba, con oralidad, publicidad e intermediación. Así, la realidad del proceso disolverá la imagen de una Justicia lejana, aparentemente situada al final de trámites excesivos y dilatados, en los que resulta difícil percibir el interés y el esfuerzo de los Juzgados y Tribunales y de quienes los integran.

Justicia civil efectiva significa, en fin, mejores sentencias, que, dentro de nuestro sistema de fuentes del Derecho, constituyan referencias sólidas para el futuro y contribuyan así a evitar litigios y a reforzar la igualdad ante la ley, sin merma de la libertad enjuiciadora y de la evolución y el cambio jurisprudencial necesarios.

Esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se inspira y se dirige en su totalidad al interés de los justiciables, lo que es tanto como decir al interés de todos los sujetos jurídicos y, por consiguiente, de la sociedad entera. Sin ignorar la experiencia, los puntos de vista y las propuestas de todos los profesionales protagonistas de la Justicia civil, esta Ley mira, sin embargo, ante todo y sobre todo, a quienes demandan o pueden demandar tutela jurisdiccional, en verdad efectiva, para sus derechos e intereses legítimos.

II

Con todas sus disposiciones encaminadas a estas finalidades, esta nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se alinea con las tendencias de reforma universalmente consideradas más razonables y con las experiencias de más éxito real en la consecución de una tutela judicial que se demore sólo lo justo, es decir, lo necesario para la insoslayable confrontación procesal, con las actuaciones precisas para preparar la sentencia, garantizando su acierto.

No se aceptan ya en el mundo, a causa de la endebles de sus bases jurídicas y de sus fracasos reales, fórmulas simplistas de renovación de la Justicia civil, inspiradas en unos pocos elementos entendidos como panaceas. Se ha advertido ya, por ejemplo, que el cambio positivo no estriba en una concentración a ultranza de los actos procesales, aplicada a cualquier tipo de casos. Tampoco se estima aconsejable ni se ha probado eficaz una alteración sustancial de los papeles atribuibles a los protagonistas de la Justicia civil.

Son conocidos, por otra parte, los malos resultados de las reformas miméticas, basadas en el trasplante de institutos procesales pertenecientes a modelos jurídicos diferentes. La identidad o similitud de denominaciones entre Tribunales o entre instrumentos procesales no constituye base razonable y suficiente para ese mimetismo. Y aún menos razonable resulta el impulso, de ordinario inconsciente, de sustituir en bloque la Justicia propia por la de otros países o áreas geográficas y culturales. Una tal sustitución es, desde luego, imposible, pero la mera influencia de ese impulso resulta muy perturbadora para las reformas legales: se generan nuevos y más graves problemas, sin que apenas se propongan y se logren mejoras apreciables.

El aprovechamiento positivo de instituciones y experiencias ajenas requiere que unas y otras sean bien conocidas y comprendidas, lo que significa cabal conocimiento y comprensión del entero modelo o sistema en que se integran, de sus principios inspiradores, de sus raíces históricas, de los diversos presupuestos de su funcionamiento, empezando por los humanos, y de sus ventajas y desventajas reales.

Esta Ley de Enjuiciamiento Civil se ha elaborado rechazando, como método para el cambio, la importación e implantación inconexa de piezas aisladas, que inexorablemente conduce a la ausencia de modelo o de sistema coherente, mezclando perturbadoramente modelos opuestos o contradictorios. La Ley configura una Justicia civil nueva en la medida en que, a partir de nuestra actual realidad, dispone, no mediante palabras y preceptos aislados, sino con regulaciones plenamente articuladas y coherentes, las innovaciones y cambios sustanciales, antes aludidos, para la efectividad, con plenas garantías, de la tutela que se confía a la Jurisdicción civil.

En la elaboración de una nueva Ley procesal civil y común, no cabe despreocuparse del acierto de las sentencias y resoluciones y afrontar la reforma con un rechazable reduccionismo cuantitativo y estadístico, sólo preocupado de que los asuntos sean resueltos, y resueltos en el menor tiempo posible. Porque es necesaria una pronta tutela judicial en verdad efectiva y porque es posible lograrla sin merma de las garantías, esta Ley reduce drásticamente trámites y recursos, pero, como ya se ha dicho, no prescinde de cuanto es razonable prever como lógica y justificada manifestación de la contienda entre las partes y para que, a la vez, el momento procesal de dictar sentencia esté debidamente preparado.

III

Con perspectiva histórica y cultural, se ha de reconocer el incalculable valor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 1881. Pero con esa misma perspectiva, que incluye el sentido de la realidad, ha de reconocerse, no ya el agotamiento del método de las reformas parciales para mejorar la impartición de justicia en el orden jurisdiccional civil, sino la necesidad de una Ley nueva para procurar acoger y vertebrar, con radical innovación, los planteamientos expresados en los apartados anteriores.

La experiencia jurídica de más de un siglo debe ser aprovechada, pero se necesita un Código procesal civil nuevo, que supere la situación originada por la prolija complejidad de la Ley antigua y sus innumerables retoques y disposiciones extravagantes. Es necesaria, sobre todo, una nueva Ley que afronte y dé respuesta a numerosos problemas de imposible o muy difícil resolución con la ley del siglo pasado. Pero, sobre todo, es necesaria una Ley de Enjuiciamiento Civil nueva, que, respetando principios, reglas y criterios de perenne valor, acogidos en las leyes procesales civiles de otros países de nuestra misma área cultural, exprese y materialice, con autenticidad, el profundo cambio de mentalidad

que entraña el compromiso por la efectividad de la tutela judicial, también en órdenes jurisdiccionales distintos del civil, puesto que esta nueva Ley está llamada a ser ley procesal supletoria y común.

Las transformaciones sociales postulan y, a la vez, permiten una completa renovación procesal que desborda el contenido propio de una o varias reformas parciales. A lo largo de muchos años, la protección jurisdiccional de nuevos ámbitos jurídico-materiales ha suscitado, no siempre con plena justificación, reglas procesales especiales en las modernas leyes sustantivas. Pero la sociedad y los profesionales del Derecho reclaman un cambio y una simplificación de carácter general, que no se lleven a cabo de espaldas a la realidad, con frecuencia más compleja que antaño, sino que provean nuevos cauces para tratar adecuadamente esa complejidad. Testimonio autorizado del convencimiento acerca de la necesidad de esa renovación son los numerosos trabajos oficiales y particulares para una nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que se han producido en las últimas décadas.

Con sentido del Estado, que es conciencia clara del debido servicio desinteresado a la sociedad, esta Ley no ha prescindido, sino todo lo contrario, de esos trabajos. Los innumerables preceptos acertados de la Ley de 1881, la ingente jurisprudencia y doctrina generada por ella, los muchos informes y sugerencias recibidos de distintos órganos y entidades, así como de profesionales y expertos prestigiosos, han sido elementos de gran valor e interés, también detenidamente considerados para elaborar esta Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, se han examinado con suma atención y utilidad, tanto el informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial como el solicitado al Consejo de Estado. Cabe afirmar, pues, que la elaboración de esta Ley se ha caracterizado, como era deseable y conveniente, por una participación excepcionalmente amplia e intensa de instituciones y de personas cualificadas.

IV

En esta Ley se rehuyen por igual, tanto la prolijidad como el esquematismo, propio de algunas leyes procesales extranjeras, pero ajeno a nuestra tradición y a un elemental detalle en la regulación procedimental, que los destinatarios de esta clase de Códigos han venido considerando preferible, como más acorde con su certera y segura aplicación. Así, pues, sin caer en excesos reguladores, que, por querer prever toda incidencia, acaban suscitando más cuestiones problemáticas que las que resuelven, la presente Ley aborda numerosos asuntos y materias sobre las que poco o nada decía la Ley de 1881.

Al colmar esas lagunas, esta Ley aumenta, ciertamente, su contenido, pero no por ello se hace más extensa -al contrario- ni más complicada, sino más completa. Es misión y responsabilidad del legislador no dejar sin respuesta clara, so capa de falsa sencillez, los problemas reales, que una larga experiencia ha venido poniendo de relieve.

Nada hay de nuevo, en la materia de esta Ley, que no signifique respuestas a interrogantes con relevancia jurídica, que durante más de un siglo, la jurisprudencia y la doctrina han debido abordar sin guía legal clara. Ha parecido a todas luces inadmisibles procurar una apariencia de sencillez legislativa a base de omisiones, de cerrar los ojos a la complejidad de la realidad y negarla, lisa y llanamente, en el plano de las soluciones normativas.

La real simplificación procedimental se lleva a cabo con la eliminación de reiteraciones, la subsanación de insuficiencias de regulación y con una nueva ordenación de los procesos declarativos, de los recursos, de la ejecución forzosa y de las medidas cautelares, que busca ser clara, sencilla y completa en función de la realidad de los litigios y de los derechos, facultades, deberes y cargas que corresponden a los tribunales, a los justiciables y a quienes, de un modo u otro, han de colaborar con la Justicia civil.

En otro orden de cosas, la Ley procura utilizar un lenguaje que, ajustándose a las exigencias ineludibles de la técnica jurídica, resulte más asequible para cualquier ciudadano, con eliminación de expresiones hoy obsoletas o difíciles de comprender y más ligadas a antiguos usos forenses que a aquellas exigencias. Se elude, sin embargo, hasta la apariencia de doctrinarismo y, por ello, no se considera inconveniente, sino todo lo contrario, mantener diversidades expresivas para las mismas realidades, cuando tal fenómeno ha sido acogido tanto en el lenguaje común como en el jurídico. Así, por ejemplo, se siguen utilizando los términos "juicio" y "proceso" como sinónimos y se emplea en unos casos los vocablos "pretensión" o "pretensiones" y, en otros, el de "acción" o "acciones" como aparecían en la Ley de 1881 y en la jurisprudencia y doctrina posteriores, durante más de un siglo, sin que ello originara problema alguno.

Se reducen todo lo posible las remisiones internas, en especial las que nada indican acerca del precepto o preceptos a los que se remite. Se acoge el criterio de división de los artículos, siempre que sea necesario, en apartados numerados y se procura que éstos tengan sentido por sí mismos, a diferencia de los simples párrafos, que han de entenderse interrelacionados. Y sin incurrir en exageraciones de exactitud, se opta por referirse al órgano jurisdiccional con el término “tribunal”, que, propiamente hablando, nada dice del carácter unipersonal o colegiado del órgano. Con esta opción, además de evitar una constante reiteración, en no pocos artículos, de la expresión “Juzgados y Tribunales”, se tiene en cuenta que, según la legislación orgánica, cabe que se siga ante tribunales colegiados la primera instancia de ciertos procesos civiles.

V

En cuanto a su contenido general, esta Ley se configura con exclusión de la materia relativa a la denominada jurisdicción voluntaria, que, como en otros países, parece preferible regular en ley distinta, donde han de llevarse las disposiciones sobre una conciliación que ha dejado de ser obligatoria y sobre la declaración de herederos sin contienda judicial. También se obra en congruencia con el ya adoptado criterio de que una ley específica se ocupe del Derecho concursal. Las correspondientes disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 permanecerán en vigor sólo hasta la aprobación y vigencia de estas leyes.

En coincidencia con anteriores iniciativas, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil aspira también a ser Ley procesal común, para lo que, a la vez, se pretende que la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985, circunscriba su contenido a lo que indica su denominación y se ajuste, por otra parte, a lo que señala el apartado primero del artículo 122 de la Constitución. La referencia en este precepto al “funcionamiento” de los Juzgados y Tribunales no puede entenderse, y nunca se ha entendido, ni por el legislador postconstitucional ni por la jurisprudencia y la doctrina, como referencia a las normas procesales, que, en cambio, se mencionan expresamente en otros preceptos constitucionales.

Así, pues, no existe impedimento alguno y abundan las razones para que la Ley Orgánica del Poder Judicial se desprenda de normas procesales, no pocas de ellas atinadas, pero impropiedades situadas y productoras de numerosas dudas al coexistir con las que contienen las Leyes de Enjuiciamiento. Como es lógico, la presente Ley se beneficia de cuanto de positivo podía hallarse en la regulación procesal de 1985.

Mención especial merece la decisión de que en esta Ley se regule, en su vertiente estrictamente procedimental, el instituto de la abstención y de la recusación. Es ésta una materia, con innegables facetas distintas, de la que se ocupaban las leyes procesales, pero que fue regulada, con nueva relación de causas de abstención y recusación, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985. Empero, la subsistencia formal de las disposiciones sobre esta citada materia en las diversas leyes procesales originó algunos problemas y, por otro lado, la regulación de 1985 podía mejorarse y, de hecho, se mejoró en parte por obra de la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de diciembre.

La presente Ley es ocasión que permite culminar ese perfeccionamiento, afrontando el problema de las recusaciones temerarias o con simple ánimo de dilación o de inmediata sustitución del Juez o Magistrado recusado. En este sentido, la extemporaneidad de la recusación se regula más precisamente, como motivo de inadmisión a trámite, y se agilizan y simplifican los trámites iniciales a fin de que se produzca la menor alteración procedimental posible. Finalmente, se prevé multa de importante cuantía para las recusaciones que, al ser resueltas, aparezcan propuestas de mala fe.

VI

La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil sigue inspirándose en el principio de justicia rogada o principio dispositivo, del que se extraen todas sus razonables consecuencias, con la vista puesta, no sólo en que, como regla, los procesos civiles persiguen la tutela de derechos e intereses legítimos de determinados sujetos jurídicos, a los que corresponde la iniciativa procesal y la configuración del objeto del proceso, sino en que las cargas procesales atribuidas a estos sujetos y su lógica diligencia para obtener la tutela judicial que piden, pueden y deben configurar razonablemente el trabajo del órgano jurisdiccional, en beneficio de todos.

De ordinario, el proceso civil responde a la iniciativa de quien considera necesaria una tutela judicial en función de sus derechos e intereses legítimos. Según el principio procesal citado, no se entiende razonable que al órgano jurisdiccional le incumba investigar y

comprobar la veracidad de los hechos alegados como configuradores de un caso que pretendidamente requiere una respuesta de tutela conforme a Derecho. Tampoco se grava al tribunal con el deber y la responsabilidad de decidir qué tutela, de entre todas las posibles, puede ser la que corresponde al caso. Es a quien cree necesitar tutela a quien se atribuyen las cargas de pedirla, determinarla con suficiente precisión, alegar y probar los hechos y aducir los fundamentos jurídicos correspondientes a las pretensiones de aquella tutela. Justamente para afrontar esas cargas sin indefensión y con las debidas garantías, se impone a las partes, excepto en casos de singular simplicidad, estar asistidas de abogado.

Esta inspiración fundamental del proceso -excepto en los casos en que predomina un interés público que exige satisfacción- no constituye, en absoluto, un obstáculo para que, como se hace en esta Ley, el tribunal aplique el Derecho que conoce dentro de los límites marcados por la faceta jurídica de la causa de pedir. Y menos aún constituye el repetido principio ningún inconveniente para que la Ley refuerce notablemente las facultades coercitivas de los tribunales respecto del cumplimiento de sus resoluciones o para sancionar comportamientos procesales manifiestamente contrarios al logro de una tutela efectiva. Se trata, por el contrario, de disposiciones armónicas con el papel que se confía a las partes, a las que resulta exigible asumir con seriedad las cargas y responsabilidades inherentes al proceso, sin perjudicar a los demás sujetos de éste y al funcionamiento de la Administración de Justicia.

VII

En el ámbito de las disposiciones generales, la Ley introduce numerosas innovaciones con tres grandes finalidades: regular de modo más completo y racional materias y cuestiones diversas, hasta ahora carentes de regulación legal; procurar un mejor desarrollo de las actuaciones procesales; y reforzar las garantías de acierto en la sentencia.

A todas las disposiciones generales sobre la jurisdicción y la competencia, los sujetos del proceso, sus actos y diligencias, las resoluciones judiciales, los recursos, etc., concede la Ley la importancia que merecen, a fin de que constituyan pautas realmente aplicables en las distintas fases del proceso, sin necesidad de reiterar normas y regulaciones enteras.

En cuanto a las partes, la Ley contiene nuevos preceptos que regulan esa materia de modo más completo y con más orden y claridad, superando, a efectos procesales, el dualismo de las personas físicas y las jurídicas y con mejora de otros aspectos, relativos a la sucesión procesal, a la intervención adhesiva litisconsorcial y a la intervención provocada. Asimismo, el papel y responsabilidad de los litigantes se perfila más precisamente al regularse de modo expreso y unitario los actos de disposición (renuncia, allanamiento y desistimiento y transacción), así como, en su más adecuada sede, la carga de la alegación y de la prueba. Las normas sobre estas materias explicitan lo que es conquista pacífica de la jurisprudencia y de la ciencia jurídica e importan no poco para el desenlace del proceso mediante una sentencia justa.

A propósito de las partes, aunque en verdad desborde ampliamente lo que es su reconocimiento y tratamiento procesal, parece oportuno dar razón del modo en que la presente Ley aborda la realidad de la tutela de intereses jurídicos colectivos, llevados al proceso, no ya por quien se haya visto lesionado directamente y para su individual protección, o por grupos de afectados, sino por personas jurídicas constituidas y legalmente habilitadas para la defensa de aquellos intereses.

Esta realidad, mencionada mediante la referencia a los consumidores y usuarios, recibe en esta Ley una respuesta tributaria e instrumental de lo que disponen y puedan disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y difícil, de la concreta tutela que, a través de las aludidas entidades, se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios en cuanto colectividades. Como cauce para esa tutela, no se considera necesario un proceso o procedimiento especial y sí, en cambio, una serie de normas especiales, en los lugares oportunos.

Por un lado, la actuación procesal de las personas jurídicas y de los grupos se hace posible sin dificultad en cuanto a su personalidad, capacidad y representación procesales. Y, por otro lado, tras una norma previsor de la singular legitimación de dichas entidades, la Ley incluye, en los lugares adecuados, otros preceptos sobre llamamiento al proceso de quienes, sin ser demandantes, puedan estar directamente interesados en intervenir, sobre acumulación de acciones y de procesos y acerca de la sentencia y su ejecución forzosa.

La amplitud de la intervención procesal prevista con carácter general permite desechar una obligatoria acumulación inicial de demandas, con el retraso a que obligaría en la sus-

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

La presente obra contiene el texto completo de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, debidamente actualizada, concordada y con un completo índice analítico.

PVP 7,00 €

ISBN: 978-84-1359-218-3



9 788413 592183